

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 11° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-33153-2019
CARATULADO	: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA/FARMACIAS
AHUMADA S.A.	

Santiago, nueve de Marzo de dos mil veinte

Santiago,

Visto

Ha comparecido el Instituto de salud Pública de Chile, representado por su Directora María Soledad Velásquez Urrutia, ambos con domicilio en avenida Matathon N° 1000, comuna de Ñuñoa, quien dedujo demanda ejecutiva en contra de Farmacias Ahumadas S.A., representada por Juan Barreras Suarez, con domicilio en calle Miraflores N° 303, piso 6, comuna de Santiago, solicitando que se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de 100 UTM, cuyo equivalente al mes de noviembre de 2019 corresponde a \$4.816.000.-, con costas.

Señala que por sentencia de Resolución Exenta N°0877 de 10 de marzo de 2016, pronunciada por el Dr. Alex Figueroa Muñoz, director de su representada, se aplicó al ejecutado una multa correspondiente a la suma de 100 UTM, en el contexto del sumario sanitario ordenado en la Resolución Exenta N°3027 de 31 de agosto de 2015.

Indica que dicha resolución se notificó con fecha 22 de marzo de 2016, que se encuentra firme y ejecutoriada; y hasta la fecha de la presentación de esta demanda la multa se encuentra impaga llegando a un total de 100 UTM.

Explica que con fecha 30 de marzo de 2016, Farmacias Ahumada S.A. presentó recurso de reposición en sede administrativa, cuestión que fue resuelta por medio de la Resolución Exenta número 5029 de 21 de diciembre de 2016, que rechazó el recurso.



«RIT»

Foja: 1

Hace presente que en virtud de la dictación de la Ley N° 20.724 que modificó el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos, de fecha 14 de febrero de 2014, se reemplazó el inciso 2° del artículo 174 del Código Sanitario, señalando dicha norma en la actualidad, que “las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán merito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”.

Comparece Farmacias Ahumada S.A., quien deduce la excepción del artículo 464 número 17 del Código de Procedimiento Civil, esto es, prescripción de la deuda, fundado en el hecho que la demanda ejecutiva dice relación con la existencia de una sentencia emanada de la parte ejecutante conforme a resolución exenta N°0877 de fecha 10 de marzo de 2016 que condena en definitiva a su representada al pago de una multa de 100 UTM en el contexto de un sumario sanitario ordenado por dicha institución.

Indica que la sentencia en comento fue notificada a mi representada con fecha 22 de marzo de 2016, que su representada interpuso recurso de reposición en sede administrativa el cual habría sido resuelto con fecha 21 de diciembre de 2016, siendo rechazado.

Al citar la Ley 20.724 que modifica el Código Sanitario, reemplazando lo señalado en el inciso 2° del artículo 174 de dicho cuerpo legal, conforme a ello la demandante señala que la obligación por la cual demanda constaría en un título ejecutivo, sin embargo ello no establece norma especial alguna respecto a la prescripción de dicho título.

Respecto de las sanciones administrativas no existen normas claras de prescripción, no obstante ello, el Tribunal Constitucional desde la sentencia que se pronunció sobre la modificación de la Ley de Caza, Rol N° 244, de 24 de agosto de 1996 ha venido señalando que el Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal conforman una unidad, atendido que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado, siendo en consecuencia aplicables al Derecho administrativo sancionador las reglas y principios jurídicos del ordenamiento penal, entre ellas las reglas de prescripción extintiva. Agrega que en materia de Derecho administrativo sancionador tanto el Tribunal Constitucional, como la Contraloría General de la República están contestes que cualquier distinción que pudiese hacerse entre el Derecho administrativo sancionador y el Derecho



«RIT»

Foja: 1

penal obedece, exclusivamente, a un criterio cuantitativo, puesto que el ilícito administrativo, comparado con el de naturaleza penal, es un injusto de significación ético-social reducida, que por razones de conveniencia y de política legislativa se le ha encargado a la Administración, en lugar de los tribunales de justicia.

Sostiene que en cuanto al plazo de prescripción de las sanciones administrativas, la Contraloría estima que éste no puede ser otro que el de seis meses aplicable a las faltas, señalado en el artículo 97 del Código Penal ya que no es posible asimilar las infracciones administrativas a crímenes o simples delitos ni mucho menos acudir a las normas civiles de prescripción.

Finalmente expone que resulta del todo contraproducente la acción entablada por la ejecutante por cuanto dicha institución con fecha 22 de Noviembre de 2019 en resolución exenta 4458 en un caso similar al de autos señala que “Con ello podemos concluir que tanto la parte ejecutante como la ejecutada se encuentran contestes que el plazo de prescripción de las acciones de esta naturaleza corresponde efectivamente a 6 meses, en la línea de lo dispuesto con la Contraloría General de la República y los propios tribunales de justicia”

El 25 de enero de 2020, la parte ejecutante evacuó el traslado conferido, solicitando el rechazo de la excepción opuesta, con costas.

Con fecha 05 de febrero de 2020, se declaró admisible la excepción, se omitió recibir la causa a prueba, por tratarse de puntos de derecho y se citó a las partes a oír sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Ha comparecido el Instituto de salud Pública de Chile, representado por su Directora María Soledad Velásquez Urrutia, ambos con domicilio en avenida Matathon N° 1000, comuna de Ñuñoa, quien dedujo demanda ejecutiva en contra de Farmacias Ahumadas S.A., representada por Juan Barreras Suarez, con domicilio en calle Miraflores N° 303, piso 6, comuna de Santiago, solicitando que se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de 100 UTM, cuyo equivalente al mes de noviembre de 2019 corresponde a \$4.816.000.-, con costas, pretensión que sustenta en



«RIT»

Foja: 1

los antecedentes de hecho y derecho que ya fueron reseñados en la parte expositiva de la presente sentencia.

Segundo: Al comparecer la ejecutada opone excepción de prescripción, conforme lo dispuesto en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, planteamientos que fueron expuestos en la primera parte de este fallo.

Tercero: De lo expuesto por las partes en sus escritos principales, es posible afirmar que o existe controversia sobre los siguientes hechos a) que por sentencia de resolución exenta N° 0877 de fecha 10 de marzo de 2016, se impuso al ejecutado una multa de 100 UTM; b) que las multas que fueron impuestas se notificaron el 22 de marzo de 2016; c) que las resoluciones que interpusieron las multas quedaron firmes y ejecutoriadas el 21 de diciembre de 2016; y d) que la ejecutada no ha pagado las multas.

Cuarto: Que en síntesis e invocando un fallo del Tribunal Constitucional del año 1996 y dos del año 2006, la ejecutada plantea que en el derecho administrativo sancionatorio se aplican, con matices, las normas del derecho penal, por lo cual las reglas de prescripción del derecho civil no son aplicables y si lo es el artículo 97 del Código Penal.

Quinto: Para resolver respecto del plazo de la prescripción de la acción ejecutiva derivada de la multa administrativa, es útil precisar que la circunstancia de encontrarse reguladas algunas responsabilidades por normas de derecho público no impide que ellas puedan extinguirse por el transcurso del tiempo, en razón que la prescripción es una institución de carácter universal e indispensable para asegurar la certeza y la seguridad en las relaciones jurídicas entre las personas. De allí que ella pueda operar en todas las disciplinas que pertenecen al ámbito del Derecho Público. Por consiguiente, acorde con este predicamento, la prescripción de las acciones procede en nuestro derecho positivo como regla general, la que sólo cesa cuando la ley expresamente determine su imprescriptibilidad.

Sexto: Asentada la premisa de que la prescripción, como regla general, es aplicable también en el ámbito del derecho administrativo sancionador, cabe consignar que el Código Sanitario no contempla disposiciones que establezcan la imprescriptibilidad



«RIT»

Foja: 1

de las acciones destinadas a castigar las infracciones administrativas relativas a la normativa del ramo.

Ante la ausencia de norma expresa en el ordenamiento citado, tratándose de disposiciones especiales, debe entenderse que -en lo no contemplado expresamente en ellas- se han de aplicar supletoriamente las reglas del Derecho Común que, según la materia específica, correspondan.

Séptimo: Cabe considerar que en el ámbito de que se trata no corresponde aplicar la prescripción de seis meses que, respecto de las faltas, contempla el artículo 97 del Código Penal. En efecto, la sola circunstancia de que la infracción conlleve una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o que deba reputarse como tal, toda vez que esta sanción es, según el artículo 21 del Código Penal, una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las faltas.

Así las cosas el plazo aplicable resulta de ser de 3 años, que es aquel que establece el artículo 2515 del Código Civil; siendo relevante destacar que tal conclusión surge de la necesidad de aplicar, en los casos que carecen de una reglamentación especial, las normas ordinarias de prescripción, de carácter común y supletorio, que más se avengan al carácter específico, en este caso, del procedimiento administrativo.

En este sentido nuestra Corte Suprema ha sostenido, además, que “se debe enfatizar que no resulta procedente aplicar el plazo de prescripción de las faltas en materia penal, porque al ser una prescripción de corto tiempo –seis meses- resultaría eludida la finalidad del legislador de dar eficacia a la Administración en la represión de estos ilícitos y la sanción contemplada en la ley carecería de toda finalidad preventiva general”

Octavo: En consecuencia el título ejecutivo que sirve de sustento al proceso de cobro emana del Código Sanitario y, al no resultar aplicables las normas de prescripción del Penal por las razones ya desarrolladas, ni existir norma especial que regule la institución de la prescripción procede aplicar las normas de derecho común, en particular lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, de acuerdo al que las acciones ejecutivas



«RIT»

Foja: 1

prescriben en tres años, todo lo cual implica que a la fecha en que la deudora fue notificada y requerida de pago no había transcurrido dicho plazo.

Noveno: Así las cosas y encontrándose firme o ejecutoriada la resolución que impuso las multas con fecha 21 de diciembre de 2016 y habiéndose notificado la demanda el 10 de enero de 2020, no ha transcurrido el plazo establecido por el legislador para declarar la prescripción de la acción ejecutiva, por lo que no queda más que rechazar la excepción, como se indicará en la parte resolutive de la sentencia.

Décimo: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 471 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte ejecutada.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1438 y 1698 del Código Civil; 144, 160, 170, 464 N° 17°, 470 y 471 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que, se **rechaza** la excepción opuesta por la parte ejecutada contemplada en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

II. Que, se ordena seguir adelante la ejecución de autos hasta hacerse entero y cumplido pago de su acreencia al ejecutante.

III.- Que, se condena en costas a la parte ejecutada.

Regístrese y archívese.

Rol C N° 33153-2019

Pronunciada por **Ricardo Núñez Videla**, Juez Titular.



«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de Marzo de dos mil veinte**

